



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, las redes judiciales de cooperación internacional y los magistrados de enlace, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto actualizar el régimen regulador del Miembro Nacional de Eurojust, actualmente regulado por la Ley 16/2006, de 26 de mayo, que sería reemplazada por el Anteproyecto sometido a informe, adaptando ese régimen, así como las atribuciones del mencionado Miembro Nacional y las relaciones entre Eurojust y las autoridades españolas a lo establecido en la redacción actual de la Decisión 2002/187/JAI, objeto de una sustancial modificación por la Decisión 2009/426/JAI.

La Exposición de Motivos del texto sometido a informe aclara que el mismo “sigue en términos generales la orientación de la Ley 16/2006 de 26 de mayo, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea que ahora se deroga, adaptando la regulación de Eurojust, de las redes de cooperación judicial internacional y de los magistrados de enlace a la normativa europea y a la realidad actual de la cooperación judicial internacional, teniendo en cuenta la pluralidad de autoridades nacionales competentes y la necesidad de definir de manera clara y homogénea el canal de intercambio de información entre Eurojust y dichas autoridades nacionales, de manera que dicha transmisión se produzca a través de un sistema organizado y con plenas garantías de



seguridad". Debe señalarse que la Ley 16/2006 fue informada, cuando se encontraba en tramitación por esta Agencia, en fecha 10 de marzo de 2005.

II

En cuanto a su contenido, el Capítulo I recoge el régimen de elección del Miembro Nacional, el Miembro nacional Adjunto y sus asistentes, introduciendo una regulación detallada de los corresponsales nacionales y desarrollando el régimen del Coordinador Nacional de Eurojust, en los términos que ya se recogen en los apartados 4 y 5 del artículo 12 de la Decisión 2002/187/JAI en su actual redacción. Asimismo, dentro de este Capítulo se establece el régimen específico del Sistema Nacional de Coordinación de Eurojust, regulado por el ya mencionado artículo 12 de la Decisión.

Igualmente se regula en este Capítulo el acceso al Sistema de gestión de casos a nivel nacional, estableciendo el artículo 14.1 las limitaciones de acceso a las informaciones del sistema por parte de las personas distintas del Miembro nacional, su Adjunto y sus asistentes, en los términos establecidos en el artículo 16 ter de la Decisión en su actual redacción. Asimismo se establece la facultad de decisión del Miembro nacional y del Ministerio de Justicia en relación con el citado acceso conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del citado artículo 16 ter.

El Anteproyecto modifica el orden de los Capítulos II y III, pasando ahora el segundo de ellos a referirse a las relaciones entre Eurojust y las autoridades españolas y el III a las atribuciones del Miembro nacional de Eurojust.

Los artículos 15 a 17 vienen a reproducir, simplificándolo, el régimen que hasta ahora se contenía en los artículos 13 a 15 de la Ley 16/2006, recogiendo el deber de colaboración con Eurojust y los cauces a través de los cuales podrá producirse la comunicación entre Eurojust y las autoridades competentes españolas.

A su vez, el artículo 18 establece el régimen de transmisión de información a Eurojust por las autoridades nacionales, recogiendo el artículo 19 las excepciones a la comunicación y el artículo 20 el modo en que deberá estructurarse la información.

En cuanto al deber de transmisión, el artículo 18.2 dispone que "Las autoridades nacionales competentes deberán informar a Eurojust sobre la existencia de toda investigación, procedimiento o condena susceptible de afectar materias competencia de Eurojust y necesaria para el cumplimiento de sus funciones en la forma, en los supuestos y con las excepciones que se establecen en esta ley. No obstante lo anterior, dicha comunicación podrá demorarse por el tiempo indispensable para no comprometer el resultado de



las Investigaciones”, no quedando obstaculizado este deber de información por el hecho de que las actuaciones hayan sido declaradas secretas, conforme prevé el artículo 18.3.

Además, el artículo 18.5 establece que “Además de la obligación de atender las solicitudes de Eurojust en casos concretos, las autoridades competentes informarán al miembro nacional de cualquier caso que afecte al menos a tres Estados miembros y para el cual se hayan transmitido solicitudes de cooperación judicial al menos a dos Estados miembros, incluidas las referentes a instrumentos que den efecto al principio de reconocimiento mutuo”, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma, que se corresponden íntegramente con los previstos en el artículo 13.6 de la Decisión 2002/187/JAI en la redacción actualmente vigente.

Finalmente, el artículo 18.8 establece que “El miembro nacional de Eurojust podrá intercambiar, sin previa autorización, con otros miembros nacionales o con las autoridades españolas competentes, cualquier información necesaria para el cumplimiento de las funciones de Eurojust. En particular, el miembro nacional será informado sin demora de todo caso que le afecte”. Se reproduce así lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Decisión 2002/187/JAI en su nueva redacción.

Asimismo, los artículos 19 y 20 ya citados regulan las excepciones a la transmisión y la estructura de la información transmitida, en los términos establecido, respectivamente, en los apartados 8 y 10 de la Decisión.

El artículo 22 se refiere a la Célula de coordinación de emergencias, creada en cumplimiento del nuevo artículo 5 bis de la Decisión 2002/187/JAI, como órgano encargado de la remisión a Eurojust de las solicitudes o resoluciones cuya ejecución sea urgente en uno o más Estados miembros, estableciendo el artículo 22.2, en los términos establecidos en el artículo 5 bis.3 de la Decisión que “el punto de contacto de la Célula transmitirá inmediatamente la solicitud al representante de la Célula del Estado Miembro en el que se origine y, si la autoridad que la transmite lo solicita explícitamente, a los representantes de la Célula de los Estados Miembros en cuyo territorio deba ejecutarse la solicitud”,

Como se ha indicado, el Capítulo III se refiere a las atribuciones del Miembro nacional de Eurojust, incorporando las modificaciones sustanciales derivadas de la reforma del artículo 9 de la Decisión 187/2002/JAI y la inclusión de los nuevos artículos 9 bis a 9 septies por la Decisión 2009/426/JAI.

Así, conforme al artículo 23.1, reproduciendo lo establecido en el artículo 9 ter de la Decisión, “El miembro nacional de Eurojust estará facultado para recibir, transmitir, proporcionar, dar curso y aportar información complementaria en relación con la ejecución de las solicitudes y resoluciones en materia de



cooperación judicial, incluidos los instrumentos que dan efecto al principio de reconocimiento mutuo, remitidas por las autoridades nacionales competentes. Cuando se ejerzan las competencias contempladas en el presente apartado, se informará sin demora a la autoridad nacional competente”. Además, se mantienen las funciones recogidas en los apartados 2 a 4 del artículo 10 de la vigente Ley en los términos en que ya aparecían previstos.

El artículo 27 regula el acceso e intercambio de información, recogiendo las potestades de acceso del miembro nacional de Eurojust en los mismos términos que se recogen actualmente en el artículo 11 de la Ley 16/2006.

El artículo 28 se refiere al tratamiento relacionado con la apertura por parte del Miembro nacional de un fichero temporal de trabajo, así como su funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 bis de la Decisión 187/2002/JAI en la redacción prevista en la Decisión 2009/426/JAI. Así, se prevé que “el miembro nacional abrirá un fichero temporal de trabajo para cada caso respecto del cual se le transmita información, siempre que la transmisión sea conforme con esta ley y la Decisión 2009/426/JAI del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, o los instrumentos contemplados en la Decisión 2005/671/JAI del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativa al intercambio de información y la cooperación concerniente a delitos terroristas. El miembro nacional será responsable de la gestión de los ficheros temporales de trabajo que haya abierto”.

Además, el miembro nacional decidirá, cuando haya abierto un fichero temporal de trabajo y teniendo en cuenta cada caso particular, si mantiene la restricción sobre dicho fichero o si da acceso al mismo, o a partes del mismo, cuando sea necesario, para que Eurojust pueda realizar sus tareas, a los demás miembros nacionales o al personal autorizado de Eurojust. Del mismo modo decidirá, cuando haya abierto un fichero temporal de trabajo, qué información sobre el fichero se introducirá en el índice”.

Por su parte, el artículo 29, bajo la rúbrica “protección de datos” reproduce, por una parte, lo establecido en el artículo 12 de la Ley 16/2006, añadiendo, conforme al artículo 18 de la Decisión 2002/187/JAI en su redacción actual que “solo podrán tener acceso a los datos personales que obren en poder de Eurojust para la realización de sus objetivos, y dentro de los límites fijados en esta ley, el miembro nacional, su adjunto y asistentes y las personas contempladas en el artículo 12 apartado 1, siempre que estén conectados al sistema de gestión de casos con arreglo al artículo 14 apartado 2 y el personal autorizado de Eurojust”.



Finalmente, el artículo 30 recoge las previsiones de los artículos 26 y 27 de la Decisión en cuanto al intercambio de información de Eurojust con otros Estados y Organizaciones.

Asimismo, los Capítulos IV y V del Anteproyecto regulan la Red de cooperación judicial internacional y los magistrados de enlace, completando la regulación de las redes de cooperación judicial internacional y de los magistrados de enlace previstos en la Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea.

III

Del contenido de las disposiciones del Anteproyecto sometido a informe se deriva la existencia de diversas cesiones de datos, tanto a nivel interno como en relación con los ficheros de Eurojust, así como la transferencia a Eurojust de los datos a los que se refieren las normas relacionadas del deber de cooperación con el mismo.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el artículo 11.2 a) habilita la cesión de los datos sin contar con dicho consentimiento en caso de que la misma se ampare en una norma con rango de Ley y el artículo 11.2 d) la autoriza “cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.

Ciertamente, las cesiones y tratamientos previstos encontrarían precisamente cobertura en el hecho de hallarse recogidas expresamente en una norma con rango de Ley, no obstante, debe recordarse que esta Agencia ha puesto reiteradamente de manifiesto que la mera adopción de una norma con rango de Ley no puede considerarse por sí sola como habilitante de un tratamiento o cesión, sino que debería analizarse si la mencionada previsión propuesta resulta conforme y respetuosa con el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución. En este sentido, si bien es cierto que la Ley puede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, establecer causas específicas legitimadoras del tratamiento de los datos de carácter personal sin que se haga preciso en tales supuestos recabar el consentimiento de los afectados, debe tenerse en cuenta que tales limitaciones deberán en todo caso resultar respetuosas con el contenido esencial del derecho fundamental, conforme exige el artículo 53.1 de la Constitución. Así lo ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional en la



Sentencia 17/2013, de 31 de enero, en cuyo fundamento jurídico 4 se señala lo siguiente

“En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que la LOPD no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia LOPD, si existe previsión legal expresa para ello [art. 11.2. a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a fines distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina- esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad- para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.”

De este modo deberá verificarse si dicha habilitación resulta coherente con los principios de protección de datos y, particularmente, con los consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.”

De este modo, para que pueda considerarse que el Proyecto establece una excepción lícita del consentimiento para las distintas comunicaciones de datos será preciso que el mismo se derive del ejercicio de finalidades “determinadas, explícitas y legítimas” y que los datos objeto de tratamiento resulten proporcionados a las mencionadas finalidades, partiendo esencialmente, del propio marco sentado por la Decisión 2002/187/JAI, en su vigente redacción, puesto que es dicha Decisión la que sienta el marco jurídico de Eurojust, cuya adaptación en el ámbito del derecho interno es llevada a cabo por el Proyecto objeto del presente informe, y a la que son aplicables los principios de primacía y efecto directo de las normas comunitarias.



IV

El artículo 3.1 de la Decisión 2002/187/jai prevé como objetivos de Eurojust:

- a) fomentar y mejorar la coordinación, entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de las investigaciones y de las actuaciones judiciales en los Estados miembros, teniendo en cuenta toda solicitud presentada por una autoridad competente de un Estado miembro y toda información aportada por cualquier órgano competente en virtud de disposiciones adoptadas en el marco de los Tratados;
- b) mejorar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular facilitando la ejecución de solicitudes y decisiones en materia de cooperación judicial, también en relación con los instrumentos que dan efecto al principio de reconocimiento mutuo;
- c) apoyar en general a las autoridades competentes de los Estados miembros para dar mayor eficacia a sus investigaciones y actuaciones.

Además, según el artículo 3.3 “De conformidad con las normas previstas en la presente Decisión y a petición de una autoridad competente de un Estado miembro o de la Comisión, Eurojust también podrá prestar su apoyo a investigaciones y actuaciones judiciales que afecten únicamente a ese Estado miembro y a la Comunidad”.

Quedan así delimitadas las finalidades que justificarán el tratamiento de datos de carácter personal por parte del propio Eurojust, a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión, debiendo recordarse que el artículo 2.1 de la misma dispone que “Eurojust contará con un miembro nacional enviado en comisión de servicios por cada Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico, ya sea un fiscal, un juez o un funcionario de policía con competencias equivalentes”. Asimismo, la Decisión prevé la presencia de suplentes y asistentes del Miembro Nacional, pudiendo además designarse corresponsales nacionales, especialmente en materia de terrorismo, según el artículo 12.

De lo que se ha venido transcribiendo se desprende que los tratamientos y cesiones de datos, tanto como consecuencia del acceso del miembro nacional de Eurojust a los tratamientos efectuados por las autoridades nacionales como las comunicaciones de información al propio Eurojust por parte de dichas autoridades, serán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 siempre que se realicen en el marco de las finalidades de Eurojust, especificadas por el artículo 3 de la Decisión 2002/187/JAI, y siempre



en el marco de las formas de delincuencia previstas en el artículo 4.1 de la propia Decisión o en los términos establecidos en los restantes supuestos por su artículo 4.2.

Al propio tiempo, para el cumplimiento de dichas finalidades la propia Decisión consagra las funciones de Eurojust, bien a través de sus miembros nacionales (artículo 6) como actuando colegiadamente (artículo 7), siendo aplicable uno u otro supuesto en los términos previstos en el artículo 5. Entre dichas funciones, es preciso recordar las relacionadas con:

- Las solicitudes de reconocimiento de las mejores condiciones de un Estado miembro para llevar a cabo una investigación concreta o unas determinadas actuaciones judiciales.
- Las solicitudes de coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros.
- La solicitud de que los Estados miembros se faciliten entre sí o a Eurojust cuanta información sea necesaria para que Eurojust cumpla sus funciones.
- La garantía de que las autoridades competentes de los Estados miembros afectados se informan mutuamente sobre las investigaciones y actuaciones judiciales de que Eurojust tenga conocimiento.
- La ayuda a las autoridades competentes de los Estados miembros para garantizar la mejor coordinación posible de las investigaciones.
- La mejora de la colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular basándose en los análisis realizados por Europol, así como la ayuda a Europol facilitándole los dictámenes basados en los análisis.

Además, la regulación de la actividad de los miembros nacionales se recoge en los artículos 9 a 9 septies. El artículo 9.3 establece que “a fin de cumplir los objetivos de Eurojust, el miembro nacional tendrá un acceso al menos equivalente al que tendría en su función de fiscal, juez o funcionario de policía, según el caso, a nivel nacional a la información que figure en los siguientes tipos de registros de su Estado miembro, o deberá poder obtenerla:

- a) el registro de antecedentes penales;



- b) los libros-registro de detenidos;
- c) los registros de investigaciones;
- d) los registros de ADN;
- e) otros registros de su Estado miembro cuando estime que estos contienen información que necesita para el ejercicio de sus funciones.

El artículo 9.4 añade que “el miembro nacional podrá ponerse directamente en contacto con las autoridades competentes de su Estado miembro”.

El artículo 9 ter determina las competencias que necesariamente habrán de otorgarse al miembro nacional, previendo su apartado 1 que “Los miembros nacionales, en su condición de autoridades nacionales competentes, estarán facultados para recibir, transmitir, proporcionar, dar curso y aportar información complementaria en relación con la ejecución de las solicitudes y resoluciones en materia de cooperación judicial, incluidos los instrumentos que dan efecto al principio de reconocimiento mutuo. Cuando se ejerzan las competencias contempladas en el presente apartado, se informará sin demora a la autoridad nacional competente”.

Asimismo, el artículo 13 se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, disponiendo en su apartado 1 que “Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán con Eurojust cualquier información necesaria con miras al cumplimiento de las funciones de esta última de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5, ateniéndose a las normas de protección de datos establecidas en la presente Decisión. Esto incluirá como mínimo la información a que se refieren los apartados 5, 6 y 7”. Además, según el artículo 13.3 “Los miembros nacionales de Eurojust estarán facultados para intercambiar, sin previa autorización, entre sí o con las autoridades competentes de su Estado miembro, cualquier información necesaria para el cumplimiento de las funciones de Eurojust. En particular, los miembros nacionales serán informados sin demora de todo caso que les afecte”. Todo ello se complementa con las normas referidas a las excepciones a este intercambio y el modo en que el mismo deberá llevarse a cabo, con remisión al Anexo de la Decisión 2009/426/JAI.

Finalmente, según el artículo 13 bis.1 establece que “Eurojust facilitará a las autoridades nacionales competentes información y reacciones en relación con los resultados del tratamiento de la información, incluida la existencia de vínculos con casos ya archivados en el sistema de gestión de casos”.

Pues bien, tomando en consideración la descripción del contenido del Anteproyecto sometido a informe, especialmente en lo referente a las modificaciones que el mismo supone frente al régimen incorporado a la Ley 16/2006, tal y como se ha descrito en el apartado II de este informe, así como el régimen previsto en la Decisión 2002/187/JAI en su redacción actual, al que

se ha hecho mención en el apartado III de este informe y partiendo asimismo de la premisa de que esta Agencia ya consideró ajustadas a la Ley Orgánica las previsiones que actualmente recoge la Ley 16/2006 al informar sobre la misma, cabe concluir que los tratamientos de datos que prevé el Anteproyecto sometido ahora a informe serán lícitos en cuanto se derivan de las finalidades previstas y son a su vez necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a Eurojust, especialmente a través de sus miembros nacionales, en los términos previstos en el artículo 6 de la Decisión 2002/187/JAI.

A su vez, las cesiones a Eurojust, previstas esencialmente en el Capítulo II Anteproyecto son conformes a la Ley Orgánica 15/1999 por cuanto tienen por objeto el desarrollo de las funciones atribuidas a Eurojust por la propia Decisión, siendo así que incluso algunas de las cesiones se encuentran expresamente establecidas en la Decisión y que las añadidas respecto de las establecidas en la Ley 16/2006 son prácticamente reproducción de lo establecido en la Decisión tras la reforma operada por la Decisión 426/2009/JAI.

De este modo, debe concluirse que las disposiciones contenidas en el Anteproyecto sometido a informe resultan ajustadas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con la Decisión 2002/187/JAI en su redacción vigente.

V

Debe ahora procederse al estudio del artículo 23 del Anteproyecto sometido a informe, a cuyo tenor “el Director de la Agencia Española de Protección de Datos formará parte, en representación del Estado español, de la Autoridad Común de Control de Eurojust”, reproduciendo así lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 16/2006.

El régimen de la autoridad común de control de Eurojust aparece regulado por el artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI, que únicamente ha sufrido modificaciones por efecto de la Decisión 209/426/JAI en relación con el procedimiento de elección de sus miembros permanentes y con la posibilidad de tener en consideración en el desempeño de las funciones de la Secretaría de la Autoridad, la experiencia de la secretaría de las autoridades comunes de control de Schengen, Europol y la creada por el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, establecida por la Decisión 200/641/JAI.

Tomando en cuenta estos antecedentes es preciso reiterar lo que ya manifestó esta Agencia en su informe de 10 de marzo de 2005 acerca de la idoneidad del Director de la Agencia como representante de España en la

mencionada autoridad común de control. En particular, el informe mencionado se pronunciaba en los siguientes términos:

“Resta, por último, hacer referencia al artículo 17 del Proyecto, que afecta directamente a las competencias de esta Agencia, toda vez que atribuye al Director de la misma la competencia de “ejercer la representación de España en la Autoridad Común de Control de Eurojust”.

Dicha Autoridad aparece regulada en el artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI, cuyo apartado 1 dispone, en su primer inciso, que “se crea una Autoridad Común de Control independiente que controlará de manera colegiada las actividades de Eurojust mencionadas en los artículos 14 a 22, a fin de garantizar que el tratamiento de los datos personales sea conforme a la presente Decisión”.

A su vez, el párrafo tercero del artículo 23.1 de la Decisión dispone que “cada Estado miembro designará, con arreglo a su sistema jurídico, un juez que no sea miembro de Eurojust, o en caso de que así lo requiera su régimen constitucional o nacional, una persona que ejerza una función que le confiera la independencia adecuada para figurar en la lista de jueces que podrán actuar en la Autoridad Común de Control en calidad de miembro o de juez ad hoc”.

El artículo 36.1 de la Ley Orgánica 15/1999 se limita a establecer que “El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años”.

Por su parte el artículo 36.4 añade que “El Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo y quedará en la situación de servicios especiales si con anterioridad estuviera desempeñando una función pública. En el supuesto de que sea nombrado para el cargo algún miembro de la carrera judicial o fiscal, pasará asimismo a la situación administrativa de servicios especiales”, de lo cual se infiere directamente que el Director de la Agencia podrá o no pertenecer a las Carreras judicial o fiscal.

Por este motivo, para que lo dispuesto en el artículo 17 del Proyecto resulte conforme a la Decisión Eurojust será preciso que el Director de la Agencia Española de Protección de Datos pueda considerarse “una persona que ejerza una función que le confiera la independencia adecuada para figurar en la lista de jueces que podrán actuar en la Autoridad Común de Control en calidad de miembro o de juez ad hoc”.



A tal efecto, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la Autoridad Común de Control será, como se ha indicado, garantizar que el tratamiento de los datos personales sea conforme a la Decisión, a cuya finalidad “estará habilitada para acceder sin reservas a todos los ficheros en los que se tratan tales datos personales”. Además, la Decisión añade que “Eurojust proporcionará a la Autoridad Común de Control cuanta información contengan los ficheros que solicite y le ayudará con cualquier otro medio a cumplir sus funciones”.

En particular, establece el artículo 23.7 de la Decisión que “La Autoridad Común de Control estudiará los recursos que se le presenten con arreglo al apartado 8 del artículo 19 y al apartado 2 del artículo 20 (derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos tratados por Eurojust), y efectuará los controles con arreglo al párrafo primero del apartado 1 del presente artículo. Si la Autoridad Común de Control estima que una decisión adoptada o un tratamiento de datos realizado por Eurojust no cumple las normas establecidas en la presente Decisión, se remitirá el dictamen a Eurojust, quien deberá dar cumplimiento a la decisión de la Autoridad Común de Control”.

Pues bien, para apreciar la concurrencia en el Director de la Agencia Española de Protección de Datos de las condiciones exigidas por el artículo 23.1 de la Decisión 2002/187/JAI será preciso que de las funciones e independencia atribuidas al mismo por la legislación “constitucional o nacional” española se desprenda su idoneidad para el ejercicio de las competencias atribuidas a la Autoridad Común de Control de Eurojust.

En lo que atañe a su independencia, el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que el Director de la Agencia “ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas”.

A su vez, el artículo 16 del estatuto de la Agencia dispone que “El Director de la Agencia de Protección de Datos desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad”, de modo que “El Director no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de autoridad alguna”.

Además, el artículo 1.2 del mencionado Estatuto dispone que “La Agencia de Protección de Datos actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia”.

Por último, el artículo 36.3 de la Ley Orgánica 15/1999 recalca esa independencia, al disponer que “el Director de la Agencia de Protección



de Datos sólo cesará antes de la expiración del período a que se refiere el apartado 1 a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso”.

De este modo, la independencia en la actuación del Director de la Agencia queda garantizada, por una parte, por el hecho de no estar sometido a relación jerárquica alguna en relación con la Administración General del Estado y, por otra, por el hecho de que aun siendo nombrado por Real Decreto únicamente podrá ser cesado en los supuestos taxativamente enumerados en el artículo 36.3 de la Ley Orgánica 15/1999.

Vista ya la concurrencia del requisito de independencia en la persona del Director de la Agencia, debe analizarse ahora la idoneidad del mismo en relación con las funciones atribuidas a aquél por la Ley y las previstas en el artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI para la Autoridad Común de Control.

El artículo 9 del estatuto de la Agencia dispone, en su apartado 1 que “Corresponde a la Agencia de Protección de Datos la cooperación con organismos internacionales y órganos de las Comunidades Europeas en materia de protección de datos”.

Al propio tiempo, el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 15/1999 enumera las funciones de la Agencia, siendo la primera de ellas “Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos”. Asimismo, corresponde a la Agencia “Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones” y “Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el Título VII de la presente Ley”.

En particular, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 290/2000, de 30 de noviembre, señala que “la exigencia constitucional de protección de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional requiere que éstos, en correspondencia con la función que poseen en nuestro ordenamiento (art. 10.1 CE), tengan una proyección directa sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas «ex» art. 149.1.1 CE para asegurar la igualdad de todos los españoles

en su disfrute. Asimismo, que dicha exigencia faculta al Estado para adoptar garantías normativas y, en su caso, garantías institucionales. A este fin la LORTAD ha atribuido a la Agencia de Protección de Datos diversas funciones y potestades, de información, inspección y sanción, para prevenir las violaciones de los derechos fundamentales antes mencionados”.

El artículo 12.2 del estatuto de la Agencia atribuye expresamente al Director las funciones de impulso de las actuaciones a las que se refieren las funciones previstas en el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a las que nos hemos referido.

Pues bien, teniendo en cuenta dichas funciones y las establecidas en el artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI, debe concluirse que existe una plena coincidencia entre las mismas, que garantiza la idoneidad del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para su ejercicio, lo que añadido a la independencia atribuida expresamente al mismo por las normas que se han indicado anteriormente lleva a la conclusión de que el Director debe ser considerado como persona que, conforme al derecho nacional español, “ejerce una función que le confiera la independencia adecuada para figurar en la lista de jueces que podrán actuar en la Autoridad Común de Control en calidad de miembro o de juez ad hoc”.

En consecuencia, el artículo 17 del Proyecto resulta conforme al artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI.”

Este criterio se reitera en el presente informe, considerando lo dispuesto en el artículo 23 del Anteproyecto sometido a informe plenamente ajustado a lo establecido por el vigente artículo 23 de la Decisión 2002/187/JAI. A tal efecto, debe reiterarse que el artículo 9 del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos otorga a la misma en exclusiva y sin restricción alguna la competencia en lo que respecta a la cooperación con organismos internacionales y órganos de las Comunidades Europeas en materia de protección de datos.